

INTRODUCCION

El Departamento de Investigaciones Generales del CINEF estuvo dedicado durante 1983 al estudio de la coyuntura nacional. De un lado, las realizaciones del primer año del gobierno de Belisario Betancur y, de otro, su plan de desarrollo "Cambio con Equidad", invitaban al análisis. Ya tuvieron oportunidad nuestros lectores de conocer parte de las conclusiones de tales análisis en la Serie Documentos Ocasionales y en anteriores números de Controversia.

En el presente número queremos exponer los puntos de vista del equipo de investigadores sobre el plan de desarrollo del gobierno. Este constituyó la ocasión para una serie de reflexiones de fondo sobre el presente y el futuro del país, que van más allá del texto mismo del plan, porque como concluye Fernando Tenjo "... el plan Cambio con Equidad, al igual que la mayoría de los planes de desarrollo en Colombia, no pasará de ser una fuente de discursos, un lineamiento bastante general de acción individual para los mandos altos y altos-medios del gobierno, y —permitiéndolo los recursos— un plan de gasto segmentado e incoherente". En suma, un catálogo de buenas intenciones.

Fernando Rojas (F.R.) quiso leer el plan en el contexto histórico de nuestro desarrollo económico. De los principios a las concreciones.

En los años 50 y 60, los planes empujaron al Estado y lo declararon mejor inversionista que el sector privado. Tan sólo disintió la OIT, con su Informe Final del Comité de Desarrollo Económico, en 1951.

A mediados de los 70, sin exorcizar el intervencionismo, el Estado pierde la fe en la eficiencia de la inversión pública y restringe su acción a las ramas de suyo inalcanzables o poco atractivas para el capital privado. Para la muestra, Cambio con Equidad 1982-1986. Se detecta, pues, un viraje claro del intervencionismo hacia el leseferismo.

F.R. discierne allí un cambio histórico: de una economía con límites claros entre obreros de gran empresa y trabajadores independientes, entre empleados y desempleados, con garantía estatal para el proceso productivo y para la reproducción de un estrato de la fuerza de trabajo, apodado 'sector formal', se da el tránsito a una economía en la que el Estado reduce las garantías mencionadas, mientras la gran empresa capitalista se fracciona en

pequeñas unidades, controladas por compraventa de bienes y servicios, y coordinadas por computador. El hogar familiar recupera toda su responsabilidad reproductiva y añade la productiva, frente a una empresa que contrata a todos sus miembros y los nivela como trabajadores estables. Ya no gana sólo el jefe, sino también su mujer y sus hijos.

Más que reactivación superficial en Colombia y en el mundo, Víctor Manuel Moncayo (V.M.) ve perfilarse una reestructuración a fondo de la forma de valorización del capital. La segunda fase esbozada por F. R. significa, según V.M., que la forma de dominación capitalista establecida entra en crisis, ante la lucha del trabajo, y empieza a explorar una nueva manera de imponerse que, a su vez, provocará una nueva confrontación. En la transición apuntada por F.R. expira un período durante el cual el capital pactó un salario calculado sobre la productividad y complementado por otro salario indirecto, entregado por un Estado benefactor. Todo lo cual hizo viables las unidades de producción gigantes. Pero, con su lucha, el trabajo superó los límites tolerables para la valorización capitalista, forzándola a una revisión mundial. Esta comienza por los espacios productivos mismos que concentrados geográficamente, facilitaron la organización de la lucha sindical. Al remitir el trabajo hacia el taller doméstico no sólo se diluye aquella organización sindical masiva, sino que los procesos productivos se hacen más fluidos y móviles por intermedio de la robotización y la informática. Del pacto salarial en convenciones colectivas y con arbitraje estatal, se camina en dirección de una remuneración fijada por los mismos productores diseminados en el espacio físico.

Cambio con Equidad no distingue semejante futuro; su promoción de la pequeña empresa apenas sale al paso del desempleo inmediato y no pretende sino activar la demanda y, paralelamente, la productividad de artículos básicos. Pero sí se descubren en el Plan indicios de la transformación entrevistada por V.M.

F.R. interpreta la preocupación por el desempleo y la correspondiente respuesta con microempresas, apoyadas por el Estado, como uno de esos indicios. Y en la extensión de servicios estatales al 'sector informal' predice una tal ampliación y elasticidad, que se empiezan a combinar educación y trabajo y a confundir producción y reproducción. Con un Sistema Nacional de Educación y un Sistema Nacional de Salud inspirados en esa cobertura ampliada, llegará el Estado a rincones hasta hoy excluidos de un tipo de servicios vinculados directamente con el salario.

F.R. no cree que tenga futuro el Plan porque carece, en primer lugar, de poder coactivo (dentro de la mejor tradición colombiana). Pero aunque lo tuviera, carece también de precisión: no da base para elaborar un presumpues-

to. Es un caldo de buenas intenciones en el que se cocinan trozos desarticulados de diagnósticos, etiologías, medios y objetivos. Prueba irrefutable: la cuantificación de los recursos indispensables para ejecutarlo y la previsión de fuentes para tales recursos.

Peor aún, el Plan no menciona la gravísima crisis cambiaría ni traza una política sindical. Entre tanto el Ministro de Hacienda no se ocupa sino de lograr crédito externo y el Ministro de Trabajo corta sin miramientos los "privilegios" de los sindicatos. Esta es la política real. Luego, el Plan ¿para qué?

Finalmente F.R. advierte que Cambio con Equidad, como fruto de transición no sigue resueltamente el rumbo del capitalismo mundial. Preludiando la nueva fase, lanza incoherentemente un salvavidas a la fase que se ahoga. Mientras Reagan y Thatcher abrazan, en público, al leseferismo y pisan, en el barullo de la crisis, el cuello de la producción atrasada, B.B. se abraza a empresas "fósiles" (siderúrgica, ferrocarriles, textiles...) y riega las eras obsoletas del capital por ramas y regiones.

Salomón Kalmanovitz (S.K.) sorprende esa labor de salvamento en el Plan y señala la inutilidad de tales maniobras. En el debate contradijo a F.R. y V.M. porque no ha visto ni la predilección del Plan por las microempresas, ni ha distinguido el rumbo que aquéllos avizoran.

S.K. ve, más bien, una crisis estructural profunda, para la que Cambio con Equidad no tiene solución. La pinta como un quiebre de la rentabilidad industrial, inducido por técnicas obsoletas, por gigantismo y por mala integración, que avanza de la mano con una recesión interna y externa, hija del descenso en la demanda interna y de la revaluación del peso. Para esta recesión el Plan sí ofrece remedios, así sean débiles.

Pero la crisis estructural es inherente a un aparato industrial que emplea cada día más máquinas y menos hombres y que genera excedentes cada vez menores. De aquí que los incentivos a la demanda remonten la inflación en lugar de expandir la inversión fríamente esquiva por efecto de la ineludible caída de la tasa de ganancia. Los guarismos que miden la rentabilidad de la industria decrecen en un tercio entre los años 70 y 80. El Plan tan sólo suministra instrumentos indirectos e inútiles: a un mal que pide intervención estatal decidida y a largo plazo, Cambio con Equidad receta saneamiento de la empresa privada con paños tibios, fomento a las tecnologías de punta, terapia en las tasas de interés y otros trucos en los que el mismo Estado se ha enredado.

Fernando Tenjo (F.T.) y Francisco De Roux (F.R.) indagan por la Equidad en el plan y encuentran que no se la toma en serio, lo cual conduce a yuxtaponer un plan de estabilidad con crecimiento económico y un plan so-

cial. Verificaron que lo social, equivalente a equidad, es adjetivo al plan y asume cariz de limosna de buena voluntad, hecha por productores y comerciantes algo eficientes para sectores menos favorecidos. Se trazan, para demostración, programas de empleo, de vivienda barata, de seguridad social, de educación, de salud, de prevención y castigo del delito...

Ellos creen que la equidad no puede adjetivarse porque es ingrediente constitutivo de la estructura económica. Sostienen que ningún negocio industrial, agrícola o de servicios prosperará sin distribución de la propiedad, de los ingresos y del poder dentro del país.

El equipo parte del diagnóstico de una crisis estructural nacional e internacional, que demanda la reacomodación de la economía y el reordenamiento de la política en el mundo. No basta la sola redistribución del ingreso por el gasto estatal, como en tiempo de Keynes; de aquí que se entienda por equidad algo más que repartir ingreso y distribuir servicios.

Su concepto de equidad postula un sector popular capaz de expresarse directamente, sin intermediarios, gracias a cierta dosis de poder político propio que les asegure algún control de la producción a quienes la trabajan con sus manos. Esa equidad postula igualmente un Estado capaz de adelantar esa representación ecuanímente, teniendo en sus manos productos y servicios de bien común. "Cambio con Equidad" va en dirección opuesta.

Esta equidad adjetiva del Plan busca "desfacer agravios" inferidos por el desarrollo del capitalismo y "enderezar entuertos" que la nueva forma de valorización exige perentoriamente en el mundo entero.

Pero las preguntas que dejan esos parches de equidad son más que las respuestas: ¿Cómo se financiarán las casas sin cuota inicial? ¿Quién empleará los diplomados a distancia? ¿Dónde está la tierra para los campesinos que van a producir los alimentos baratos?

F.T., frente a tales preguntas, optó por remontarse a la teoría, tras un modelo que coloque la equidad como núcleo. Y así razona: el Plan de Betancur tácitamente acepta que el capitalismo dependiente no asegura, de por sí, la supervivencia de grandes sectores de la población. El Estado debe intervenir, pero sin interferir las directrices capitalistas. Esto es lo que sutilmente y de buena fe insinúa la equidad en el Plan.

Propone, entonces F.T., un modelo de Equidad con Cambio cuyo núcleo sería el nivel de vida de toda la población, donde la economía se ordena dentro de las políticas sociales. Este plan apuntaría a la producción de bienes

indispensables y a la redistribución del ingreso con equidad hacia las clases asalariadas más populares. Desaparecería la frontera entre lo social y lo económico y no se tragaría la ingenuidad de lograr sus objetivos sin intervenir directamente en el aparato productivo.

F.I. muestra con detalle las medidas económicas y políticas que pueden, no sólo sustentar el crecimiento continuo de la producción de bienes indispensables (ante todo agrícolas), sino que logran impulsar con justeza la producción de bienes de capital y dosificar con firmeza la de bienes suntuarios. Ellas comprenden el control de las divisas y una política fiscal y tributaria que optimice la relación inversión-producto interno, con el castigo de la acumulación de riqueza improductiva y del consumo lujoso que la sigue.

Carlos Salgado (C.S.) e Isauro Suárez (I.S.) analizaron los programas para el sector agropecuario. El objetivo para este sector es lograr mayor capacidad para producir alimentos, generación de excedentes exportables, mejoramiento del nivel de vida, crecimiento del 4% entre 1983 y 1986 con aumento del 10% anual en exportaciones menores. Con este propósito se elevará la inversión en investigación, se adecuarán tierras, se crearán nuevos entes administrativos, etc.

De los programas agropecuarios especiales del Plan, el más importante es el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) que absorberá el 62% del presupuesto hasta 1986 (89.5% si se adicionan los cupos de crédito). Al colocar a las Fuerzas Armadas como eje del desarrollo campesino, el gobierno revela su versión del problema agrario: insuficiencia de la producción de alimentos y materias primas, amén de subutilización de la tierra, debida a la inseguridad rural que ha carcomido la rentabilidad de la inversión agropecuaria. Solución del Plan: "colonización dirigida" (acción cívico-militar) con familias voluntarias, cuyo jefe de hogar debe ser un reservista del ejército y carecer de recursos económicos. Durante los dos primeros años recibirán asistencia médica y técnica y un salario mínimo rural de manos del Comandante militar de la zona.

Obras de infraestructura se realizarán en las regiones de Caquetá, Putumayo, Magdalena Medio, Urabá, Alto Sinú, San Jorge, El Pato, etc. Pero nada se dice respecto de la distribución de la tierra en estas zonas, sobre la carencia de servicios y sobre la explotación esclavista de la mano de obra. Es la preocupación por una violencia en abstracto: ¿no estará relacionada con la impune floración de soluciones paramilitares, pero bien armadas, en las mismas localidades? Nuestro equipo identificó en el solo Magdalena Medio y en un solo año siete brotes: Los Tiznados, Los Grillos, El Embrión, Alfa 89, MAS, Justicieros del Mal, Comité de Limpieza Campesina, MAICOPA (Muer-

te a Invasores, Colaboradores y Patrocinadores). Como el Plan, ellos hablan de seguridad y accionan, mientras el PNR instala la XIV Brigada en Puerto Berrío y ésta, acoplada con la V Brigada de Barrancabermeja, eleva la densidad de la militarización a 1 soldado por 60 civiles, en promedio, para la región (el índice para el resto del país es de 1 por 240).

Ilógico sería deducir una real causalidad: nuestro punto es que si el Plan cree que la solución es militar, el escenario se llenará, aún más, de armas, y el principio de ordenamiento del cambio social en vez de equidad derramará sangre.

La violencia ha estado y está en cifras: 14.4% de los propietarios (terracientos de 500 has. o más por unidad de explotación) poseen el 66% de la tierra útil. Para el millón corto de habitantes que quedan (85.6% de la población) se deja un 34% del suelo cultivable (fundos medianos y pancoger) para que le arranquen exigüas cosechas que el IDEMA compra con cheques post-datados, mínimo 45 días. Presa para intermediarios: como en Sucre, donde una cosecha de maíz, vendida al IDEMA por 25.000 pesos (a 45 días), fue "redimida", sin demora, en 15.000, por intermediarios que se embolsillaron la diferencia. El Salvador en el corazón de Colombia: 33.304 Kms² de injusticia.

Estas grietas estructurales frustran la clave de la política agraria del Plan: reactivar la economía y controlar la inflación con estímulos a la abundante producción de alimentos baratos ¡en el corto plazo!

El pulmón de la inflación colombiana es una oferta agrícola rígida. El campo es ineficiente, la agricultura cede terreno y los precios de los alimentos se remontan. El aparente dominio inflacionario del trimestre proviene de la parálisis general que, ante la escasa demanda, baja precios para desocupar bodegas. Por tanto, el aún no previsible relleno de las grietas en la estructura agraria tomará, de realizarse, muchos años.

C.S. e I.S. lo adivinan en la caída de la tasa de crecimiento anual del sector: de 5.1% en 1970-75 a 1.6% en 1982, por constante disminución de producción. Así mismo en la baja de la demanda de frutos nacionales que marcó 0.47% a lo largo de 1982 y que ha marcado 1.47% en lo que va de 1983, arrastrando, de paso, industrias derivadas como cuero, madera y papel. Y se reafirman en la idea, cuando se pide menos financiación hoy que ayer, por donde cae parejo el número de hectáreas financiadas.

Para suplir deficiencias y semisujetar precios, así después como antes del Plan, sólo queda el recurso a las importaciones.

En síntesis, el equipo de investigadores del CINEP verificó la utilidad del plan dentro de los nuevos rumbos del capitalismo mundial, se preguntó sobre la utilidad de las maniobras para sortear los escollos económicos, cambiarios, deficitarios e industriales del país. Examinó con atención el problema agrario y dónde estaban colocados los campesinos dentro del plan. Finalmente, se insinúa un cambio total de enfoque, dejando de lado el Cambio con Equidad para buscar una Equidad con Cambio teniendo como punto de referencia el interés de grandes capas de población colombiana marginadas del progreso, la distribución y el bienestar.